



FISCALIA
DEL
TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA

ILLES BALEARS

Por el presente, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears se adhiere al Convenio sobre pautas de actuación frente a la violencia doméstica habitual suscrito en Palma de Mallorca el día 7 de octubre de dos mil dos comprometiéndose a:

1.- Colaborar desde el campo de actuación de la Fiscalía con las demás instituciones para lograr los objetivos perseguidos a través del Convenio con respecto a los principios de actuación del Ministerio Fiscal.

2.- Mantener el registro de antecedentes personales de quienes han sido denunciados por malos tratos en el ámbito familiar facilitando, únicamente, los datos registrados a los Jueces y Tribunales, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos personales.

3.- Procurar la acumulación de los distintos procesos abiertos contra la misma persona a los efectos de acreditar la habitualidad exigida por el tipo delictivo del art. 153 del Código Penal evitando así que reiteradas infracciones cometidas por la misma persona se ventilen en distintos juicios de faltas.

4.- Solicitar la adopción de cuantas medidas cautelares y de protección previstas en la Ley considere oportunas.

Palma de Mallorca, a 14 de octubre de 2002.

TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA
DE MALLORCA
S ALLOIA

15 OCT. 2002

569/02

EL FISCAL JEFE,

Fdo.: Bartolomé Barceló Oliver



ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL. PALMA DE
MALLORCA.

22



CONVENIO SOBRE PAUTAS DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA DOMÉSTICA HABITUAL.

Suscrito en Palma de Mallorca, el día siete de octubre de dos mil dos.

INSTITUCIONES FIRMANTES.-

Delegación del Gobierno en las Islas Baleares.
Conselleria de Presidència del Govern Balear.
Conselleria de Salut i Consum del Govern Balear.
Conselleria de Benestar Social del Govern Balear.
Ilustre Colegio de Abogados de Baleares.
Institut de Reinserció Social.
Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial de las Islas Baleares.

JUSTIFICACIÓN.-

El II Plan integral para la violencia doméstica habitual, entre las diversas Medidas preventivas y de sensibilización, recoge en su punto 7): "impulsar que las Comunidades Autónomas, con la colaboración de las Delegaciones de Gobierno, adopten Protocolos de coordinación con las distintas instituciones de su ámbito territorial".

Asimismo el Govern Balear aprobó el documento sobre Estrategias de prevención y tratamiento de la violencia doméstica presentado por el Institut Balear de la Dona, en el que se previene un Protocolo de actuación para coordinar a las diversas instituciones implicadas.

El Consejo General del Poder Judicial, mediante Acuerdo de 21 de marzo de 2001 a bordó la problemática jurídica derivada de la violencia doméstica mediante sugerencias legislativas y la fijación de una guía práctica de actuación.

Por su parte la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial tomó en su día acuerdos sobre las medidas destinadas a facilitar la comparecencia de testigos (al margen de las propias medidas de protección legalmente previstas), sobre constitución de una subcomisión destinada exclusivamente a tratar las cuestiones relacionadas con la violencia doméstica, y sobre implantación de una atestado único para dichas infracciones como preludio al presente Convenio.

La problemática descrita como "malos tratos" o "violencia doméstica" habituales por razón de la convivencia, constituye un fenómeno multifacético y complejo que responde a comportamientos muy diversos y se proyecta sobre situaciones de muy variado signo, caracterizándose en esencia por la generación de un clima convivencial o postconvivencial dirigido a obtener un sometimiento personal intenso que, impuesto con agresividad física o psíquica, vulnera gravemente la dignidad de las víctimas, atacando otros diversos bienes jurídicos penalmente protegidos: vida, integridad física y psíquica, y libertad, fundamentalmente.

Fruto de poderosos condicionantes sociales, culturales, y económicos, la evolución del fenómeno refleja un progresivo alumbramiento de situaciones antaño silenciadas, cuando no toleradas, y hasta encubiertas, que al impulso de un nuevo latido social, evidenciador de su repulsa y exigente de respuesta que, especialmente en la llamada violencia de género, demanda soluciones dirigidas al análisis, prevención, detección y tratamiento del problema, sólo posibles desde actuaciones conjugadas e integrales, y por ello necesariamente a bordadas desde una vertebración marcadamente multidisciplinar.

OBJETIVO Y FINALIDAD.-

1.- Señalar los comportamientos requeridos para la coordinación de las diversas instituciones y servicios con la finalidad de optimizar y mejorar los recursos existentes.

2.- Difundir las pautas de actuación previstas en el presente Convenio.

3.- Establecer los mecanismos de seguimiento aptos para mantener, adaptar y reformar periódicamente las pautas de intervención adecuadas en orden a preservar la coordinación interinstitucional conforme al presente Convenio.

4.- Procurar la ampliación del Convenio a otros ámbitos de conflictividad específica pero relacionada, especialmente en los casos de agresión sexual y en los casos de víctimas menores.

5.- Extender el marco institucional para aplicación del presente Convenio mediante aceptación de adhesiones institucionales ulteriores a su firma.

6.- Fomentar cursos, planes, o actividades de formación y divulgación relacionadas con esta materia.



ÁMBITO DE APLICACIÓN.-

El presente Convenio de coordinación frente a la violencia doméstica habitual, trata de diversificar su proyección en diferentes fases, para su aplicación cuando se requiera intervención directa o indirecta para la detección, intervención, o tratamiento, de situaciones subsumibles en aquellos preceptos penales que tipifiquen las conductas relacionadas con los malos tratos o la violencia doméstica habitual.

CONTENIDO.-

A) Detección.

La detección de cualquier situación relacionable con hechos susceptibles de recibir la aplicación del presente Convenio, dará lugar a que se verifique una análisis previo a fin de tomar las medidas de atención y orientación más urgentes.

Toda persona afectada por hechos integrados en el ámbito de aplicación del presente Convenio, con especialísima atención en los casos de que la posible víctima sea inmigrante, previa la dispensación inmediata de los propios servicios urgentes, y sin perjuicio de cumplir las obligaciones legales sobre denuncia de actividades posiblemente constitutivos de infracción criminal, será informada en la forma más adecuada posible sobre la red de servicios asistenciales, y remitida a los de carácter policial, judicial, jurídico, social, o psicológico, o cualquier otro que en cada caso se entienda más adecuado, facilitando para ello la dirección, teléfonos y horarios, así como su acompañamiento personal cuando fuera oportuno.

Todos los centros, servicios, dependencias o personal que, dependientes de las instituciones firmantes del presente Convenio, dispensen o puedan dispensar servicios relacionados con el ámbito de su posible aplicación, establecerán y mantendrán mecanismos estáticos o dinámicos dirigidos a la información de las diversas prestaciones y servicios aprovechables por las personas afectadas .

El Institut Balear de la Dona mantendrá permanentemente actualizada toda la información de que se disponga sobre servicios y prestaciones, a cuyo efecto las restantes instituciones firmantes le remitirán, o aquella podrá recabar, cuantos detalles convengan al constante mantenimiento actualizado de la información, que será compendiada en la Guía de recursos que el mencionado organismo edita, a distribuir entre los diversos Centros dependientes de las instituciones firmantes, resultando accesible por vía electrónica a la dirección: <http://ibdona.caib.es>.

Cada una de las instituciones firmantes del presente Convenio se compromete a verificar y mantener actualizada una difusión permanente del mismo en su propio ámbito interno, facilitando además su aplicación y cumplimiento por las personas, grupos, servicios, o entidades dependientes, y prestando a estos efectos colaboración con las relacionadas.

B) Intervención.

1.- Servicios sanitarios y médicos forenses.

Cuando cualesquiera servicios sanitarios o de medicina forense hayan detectado un caso susceptible de recibir la aplicación del presente Convenio, además de prestar la asistencia sanitaria oportuna, la documentarán debidamente usando en todo caso el modelo específico (anexo), donde harán constar las evidencias, vestigios y/o lesiones, procurando la mayor plasticidad en su descripción y utilizando para ello los medios de mayor fidelidad que tengan a su alcance (gráfico, fotografía, videografía), emitiendo su opinión experta sobre la posible etiología y alcance de las dolencias o lesiones, para su puesta a disposición inmediata de la Autoridad judicial, directamente o a través de sus Agentes.

El modelo específico (anexo) elaborado por el Institut Balear de la Salut (IB-SALUT) deberá ser puesto a disposición y empleado tanto por los centros, servicios o dependencias, incluyendo entre ellas las de atención urgente.

La documentación elaborada conforme al modelo específico (anexo), se procurará que sea incorporada a la historia clínica, y -en cualquier caso- será remitida a la Autoridad judicial directamente por el conducto más rápido, directo o indirecto.

2.- Servicios de asesoramiento y asistencia jurídica, social y psicológica.

Para el análisis de la situación en que halla la posible víctima, al margen de su atención médica-sanitaria, deberá procurarse a la intervención de profesionales especializados.

La intervención del Iltre. Colegio de Abogados de Baleares, la Oficina de ayuda a las víctimas, el Institut Balear de la Dona, los servicios dependientes del IRES, y cualesquiera otros existentes o implantables, se extenderá tanto en relación con las de asistencia, como las de prevención a solicitar de las Instituciones y/o Autoridades competentes, pudiendo mantener reuniones preparatorias o de trabajo en la sede de la Comisión Provincial de Policía Judicial a los anteriores efectos.



La existencia de más de un Centro o servicio especializado en una población, inclinará a su coordinación con el fin de combinar horarios y medios, tanto personales como materiales para tratar de abarcar el más amplio espectro de cobertura.

Se establecerán pautas de coordinación entre los diversos Centros y servicios de la misma clase dentro de una población, que se documentarán y remitirán a la Comisión Provincial de Policía Judicial, a efecto del presente Convenio y de su difusión adecuada, así como en orden a la deseable homogeneidad en las pautas de coordinación.

Se fijarán canales para comunicación ágil entre Centros y servicios de distinta clase dentro de una misma población, comunicando el método a la Comisión Provincial de Policía Judicial, que procurará la homogeneización de las prácticas.

Cuando ello fuera necesario, se procurarán pautas de coordinación entre poblaciones distintas, sean o no los servicios de la misma clase, y en su caso métodos de cobertura territorial a cargo de un Centro o servicio de asesoramiento y asistencia cuando acepte prestarlos más allá de su ámbito genuino, con el fin de obtener su extensión .

Las precedentes pautas de coordinación deberán contemplar el modo de observar una permanente intercomunicación de cuantos servicios distintos asistan a las diferentes personas involucradas en un mismo asunto tributario del presente Convenio, con la finalidad de prestar un asesoramiento y asistencia que cuente con garantías de tratamiento integral.

La asistencia de carácter social y psicológica se verificará mediante la recogida de datos pertinentes, que se documentarán a efecto de expedir los correspondientes informes ulteriores, incluyendo los referentes al estado psicológico de la posible víctima y en su caso de los hijos.

3.- Servicios policiales.

El desarrollo de las funciones policiales relacionadas con los hechos contemplados en el presente Convenio, se verificará de forma que las personas afectadas reciban un trato personalizado e inmediato, dispensado por funcionarios especializados cuando existan.

Se procurará que la toma de declaración a la presunta víctima sea verificada en el entorno más reservado posible, tomando en todo caso las cautelas adecuadas para evitar el acercamiento o el contacto personal con la persona o personas presuntamente agresoras, sus allegados o quienes pudieran estar relacionados. La prestación de declaración de la presunta víctima se verificará, en cuanto fuera posible y consintiera, por medios de grabación audiovisual.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad destinarán funcionarios especializados al tratamiento de las cuestiones relacionadas con el ámbito de aplicación del presente Convenio, quienes intervendrán directa e inmediatamente cuando el caso lo requiera, sin perjuicio de la colaboración procedente de cualesquiera otros servicios policiales no especializados en la materia.

En caso de comparecencia personal de la presunta víctima, se atenderá de inmediato a su asistencia estimada urgente, recabando la de naturaleza sanitaria que sea imprescindible o por traslado al centro sanitario, compatibilizándolas en la medida de lo posible con la función investigadora y de aseguramiento de la prueba, y en caso de resultar posible se procederá al traslado de la persona a las dependencias adecuadas para iniciar las investigaciones del caso.

Si la noticia sobre un hecho susceptible de recibir la aplicación del presente Convenio es recibida de forma indirecta o referencial, es decir sin comparecencia personal de la persona afectada, se procederá a la inmediata comprobación *in situ* y a la averiguación de los hechos denunciados, a teniendo con preferencia a las labores de asistencia más urgentes, recabando la de naturaleza sanitaria que sea imprescindible o por traslado al centro sanitario, y compatibilizándolas en la medida de lo posible con la función investigadora y de aseguramiento de la prueba.

En los supuestos de negativa a denunciar, se practicarán las diligencias necesarias para la averiguación del hecho y aseguramiento de aquellas pruebas respecto de las que cualquier dilación pueda comprometer en su eficacia, siendo todo ello puesto a disposición de la Autoridad judicial.

La documentación de las diligencias se verificará conforme al modelo de atestado único aprobado por la Comisión Provincial de Policía Judicial, destinado a obtener una recogida de datos homogeneizada en formato y contenido, para ordenar y tratar con más utilidad la multiplicidad de circunstancias de cara a su análisis y sistematización, y facilitando su tratamiento estadístico; todo ello sin perjuicio de las modificaciones que en el mismo quepa verificar cuando resulte conveniente en orden a implementar o variar la recogida de datos en el supuesto concreto.



En cualquier caso, se haya o no verificado la utilización del atestado único, las diligencias policiales de averiguación se encaminarán a practicar lo conducente a que consten los siguientes extremos:

En cuanto al denunciado:

Relación con la víctima

Recursos económicos.

Adicciones (Toxicomanías, Alcoholismo, Ludopatía, Etc...)

Posesión de Armas (Licencia, nº de armas, etc.) u otros objetos peligrosos.

En cuanto a la víctima:

Recursos económicos, con especial atención a las cuentas bancarias.

La existencia o no de procedimiento civil y en caso afirmativo referirlo.

Si ha recibido asistencia psicológica.

Si ha recibido asistencia jurídica.

En cuanto a la convivencia:

Composición del grupo familiar que convivan en el mismo domicilio, incluyendo, si fuera relevante, los recursos económicos y trabajo que desempeña cada uno de sus integrantes.

En cuanto a los hechos:

Determinación de posibles antecedentes por hechos similares o relacionados.

En caso positivo si fueron denunciados.

Si están o no vigentes medidas cautelares y en caso positivo el número de procedimiento y de Juzgado.

Descripción pormenorizada de los hechos, recabando antecedentes por hechos anteriores.

Referencia a la posible figura penal y su tipificación.

En cuanto a las diligencias practicadas deberá consignarse:

Referencias y averiguaciones sobre el estado mental de la persona investigada.

Posibles testigos directos y de referencia, sobre hechos anteriores, simultáneos o posteriores al hecho investigado.

Asistencia médica recibida y la naturaleza y alcance de las posibles lesiones, procurando una plasmación fidedigna e ilustrativa mediante fotografía o videogramación cuando tales medios estén al alcance.

Situación en que queda la víctima después de la denuncia.

Situación en que quedan los menores que acompañan o están a cargo de la víctima.

Ofrecimiento de acciones legales (arts. 109 y 110 LECrim.).

En cuanto a la información:

La referente al contenido del art. 464 del Código Penal (Instrucción de la Fiscalía General del Estado).

La posibilidad de solicitar a la Autoridad judicial las medidas previas a la separación personal.

Las medidas de asistencia personal y protección como testigo que puedan convenir a la persona afectada.

Información acerca de los servicios de asesoramiento y asistencia social de toda índole.

Ofrecimiento de asistencia especializada mediante el Servicio de orientación jurídica que en cada momento preste el Colegio de Abogados.

Derecho a la percepción de servicios de asistencia a la víctima y ayudas conforme a la Ley 35/1995 de 11 de diciembre sobre ayudas y asistencia a las víctimas de los delitos violentos y contra la libertad sexual.

Posibilidad de solicitar medidas provisionales de separación ante Juez competente.

Se informará a la presunta víctima del estado de las investigaciones en lo que no comprometa su exitoso avance, y se le facilitarán medios para su contacto con los investigadores.

4.- El Iltre. Colegio de Abogados de Baleares mantendrá el Servicio de Asistencia Jurídica especializada a las víctimas de la violencia doméstica, tanto en cumplimiento de lo establecido en el Convenio de colaboración para la implantación en los Colegios de Abogados de servicios de asistencia jurídica especializada a las víctimas de la violencia doméstica concertado por el Consejo General de la Abogacía Española y el Ministerio de Justicia.



5.- Las actuaciones judiciales en el ámbito propio del presente Convenio, se desarrollarán prestando las personas afectadas reciban un trato personalizado e inmediato, atemperándose a lo recogido en el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial fechado el 21 de marzo de 2001 y cualesquiera otros que ulteriormente pudieran incidir sobre la materia.

Las Juntas de Jueces son invitadas a proponer, para el caso de que carezcan, normas de reparto que, aprobadas por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, estén específicamente dirigidas a tratar de reunir en un sólo procedimiento cuantos asuntos, de los prevenidos en el presente Convenio, se hallaren en tramitación respecto de unas mismas personas. Cuando aquellas no existieren, o cuando los diversos asuntos se hallen en curso ante órganos judiciales de diferente competencia territorial, podrá tratar de obtenerse el mismo efecto acudiendo a la aplicación de las disposiciones reguladoras de la acumulación de causas por conexión (arts. 17.3, 17.4, y 17.5 en la vigente la Ley de enjuiciamiento criminal) y de la competencia (arts. 18.1 y 18.2 en la vigente la Ley de enjuiciamiento criminal).

A disposición de los Decanatos judiciales, y especialmente de los Juzgados de Instrucción y de 1^a Instancia con competencia en asuntos de familia (especializados o no), será puesta la información prevista en el presente Convenio a efecto de facilitación inmediata en los casos de detección, que pueda serles de utilidad en el caso de atender a cualquier persona afectada por hechos de los que se trata, a fin de que puedan informar oportunamente acerca de los diferentes Centros y servicios donde se dispensen las prestaciones que el presente Convenio trata de coordinar, y especialmente los de asistencia social, jurídica y psicológica que radiquen en el mismo edificio o sus proximidades, así como los situados en la misma localidad o en las más próximas, a fin de que las previsiones sobre orientación y asesoramiento contempladas en el apartado A) del presente Convenio puedan cumplirse con efectividad.

Merced a las previsiones del presente Convenio en materia de detección, se procurará que el análisis de las situaciones contempladas en el mismo sea verificado por personal experto del que se recabarán en oportuno dictamen sobre valoración personal, familiar, social y en su caso psicológica, sin perjuicio de iniciar los trámites procesales pertinentes y cuantos requieran urgencia o inaplazabilidad.

En los asuntos relacionados con el presente Convenio que no haya sido utilizado el modelo de atestado aprobado por la Comisión Provincial de Policía Judicial, será ello comunicado a esta última, sin perjuicio de interesar que se complementen los datos y se practiquen las informaciones y diligencias necesarias.

En todo caso se atenderá a la posible aplicación de las disposiciones legales más favorables en orden a la simplificación de trámites, concentración de la instrucción en los primeros momentos, rapidez en la adopción de cuantas medidas cautelares y de protección considere oportunas, aceleración de la preparación del juicio, así como el enjuiciamiento rápido en los supuestos cuya sencillez lo permita, especialmente en los casos de flagrancia, detención, presencia, o posible comparecencia inmediata de la persona investigada, las restantes partes y los testigos, siempre en la forma prevista por las disposiciones procesales en vigor.

La incorporación de antecedentes sobre hechos de que trata el presente Convenio será solicitada del Ministerio Fiscal.

Se procurará que la toma de declaración a la presunta víctima sea verificada en el entorno más reservado posible, tomando en todo caso las cautelas adecuadas para evitar el acercamiento o el contacto personal con la persona o personas presuntamente agresoras, sus allegados o quienes pudieran estar relacionados. La prestación de declaración de la presunta víctima se verificará, en cuanto fuera posible, por medios de grabación audiovisual.

En los casos de renuencia a la denuncia o en los de negativa a la prestación de declaración incriminatoria, se informará a la presunta víctima sobre la obligación de denunciar y de prestar declaración a reserva de que se vea comprometida su integridad psíquica conforme a determinación experta, y se procurará asegurar el resultado de la investigación por cualesquiera otros medios probatorios; asimismo se indagarán las causas determinantes de retractaciones o incomparecencias, procediendo a la suspensión de trámites aplazables hasta haber obtenido la debida constancia de la situación.

El cumplimiento de la obligación sobre ofrecimiento de acciones (en la actualidad arts. 109 y 110 de la Ley de enjuiciamiento criminal) se verificará, en los casos contemplados en el presente Convenio, informando a la vez sobre las diferentes prestaciones que en cada caso puedan convenir, procurando obtener el auxilio experto de los Centros o servicios de atención especializados lo más inmediatamente posible si no hubieran intervenido aún.

Se informará asimismo a la persona afectada de la existencia del Servicio de orientación jurídica facilitado por el Iltre. Colegio de Abogados, a fin de que pueda recabar el más adecuado asesoramiento en todas las vertientes que le convengan, especialmente de cara al eventual ejercicio de acciones civiles en materia de separación personal que puedan requerir carácter de urgencia, así como se dará cauce a los trámites prevenidos para obtener el derecho a asistencia jurídica gratuita cuando proceda.

Caso de que la persona afectada haya decidido abandonar el domicilio donde tuviera lugar la convivencia conflictiva deberá hacerse constar adecuadamente la circunstancia para enervar eventuales acciones por posible delito de abandono de familia; y cuando vaya a mudar de domicilio o ser trasladada a un Centro de acogida, se asegurará la reserva de cualesquiera datos que pudieran revelar su paradero conforme a lo dispuesto en la LO 19/1994 de 23 de Diciembre, de protección a testigos en causas criminales.

Cuando en alguna causa se detecten aspectos relacionados con la aplicación del presente Convenio, no deberá descartarse la posible aplicación de mecanismos dirigidos a la solución alternativa del conflicto, prestando los



cauces de mediación institucionalizada existentes o implantables, como asimismo procurando la involucración -cuando fuese factible- de ambas partes en la ejecución de las medidas tanto cautelares como definitivas, especialmente en los supuestos de conformidad, en relación con los posibles mecanismos rehabilitadores y de tratamiento.

Al determinar las medidas cautelares penales que procedan (prisión provisional, alejamiento o prohibición de acercamiento, medidas de tratamiento, comparecencias periódicas de la persona imputada, protección policial, conexión al circuito de identificación telefónica, etc...), como también al establecerse las medidas provisionales o definitivas sobre separación personal, se indagará sobre la situación convivencial en que vayan a proyectarse, y especialmente sus posibles repercusiones por cumplimiento o quebrantamiento, modificación o cese de precedentes medidas ya aplicables, tanto en el orden criminal como en el civil, especialmente por lo que concierne a residencia de las personas afectadas y sus posibles relaciones de futuro con la persona presuntamente agresora, singularmente a tenor de una eventual colisión entre las medidas civiles y penales (órdenes de alejamiento o prohibición de aproximación, régimen de visitas establecido por razón de hijos comunes) que deberán modalizarse a efecto de evitar confrontaciones inconvenientes, procurando usar los servicios más idóneos en cada caso, especialmente los puntos de encuentro (donde éstos existan y en la medida de sus posibilidades), adoptando en su defecto medidas de acompañamiento o asistencia.

En consecuencia, las Juntas de Jueces son invitadas a adoptar, para el caso de que carezcan, prácticas específicamente dirigidas a la detallada definición de las competencias asignables a cada órgano en función de su diferente orden jurisdiccional, con el fin de obtener una dispensación de tutela eficaz y coherente.

Asimismo, se dará a conocer de inmediato la apertura de nuevos procedimientos judiciales relacionados con las mismas personas, la toma de nuevas decisiones, y el quebrantamiento o incumplimiento de las ya adoptadas, cuando tales eventualidades puedan resultar influyentes en su situación, tratando de coordinarlas para facilitar una respuesta integral y coherente, evitando además las disfunciones, interferencias y condicionantes que el cumplimiento o desatención de unas medidas pueda suponer respecto de las otras, para lo que es recomendable una intercomunicación inmediata entre órganos jurisdiccionales, que no resulta exclusivamente recabable en el ámbito de una misma Junta de Jueces, sino también entre los diferentes órganos judiciales del territorio, ya que pueden derivarse interferencias tanto dentro de un mismo orden jurisdiccional como entre distintos órdenes jurisdiccionales (civil o criminal), tanto durante la fase instructora como en la decisoria o en la de ejecución (en lo criminal), como en Pieza sobre medidas, en los Autos principales o en proceso de Ejecución (en lo civil), aparte de en una misma o en diferentes instancias (primera o segunda), lo que involucra tanto a los Juzgados de Instrucción y de 1^a Instancia competentes en asuntos de familia (especializados o no), como a los Juzgados de lo Penal y a la Audiencia Provincial. En consecuencia, aquella comunicación de antecedentes y trasvase de datos, diligencias, y medios probatorios, en orden a conjugar las diferentes decisiones, si no es recabada por las partes será remitida directamente cuando proceda, por el conducto más rápido, respecto de cualquier órgano judicial del territorio, independientemente de su orden jurisdiccional, y de su competencia territorial o funcional, decidiendo -cada uno de los órganos judiciales involucrados- en el ámbito de su propia competencia una vez informados adecuadamente de la situación.

Se deberá informar a la presunta víctima de cualquier alteración, variación, y especialmente el cese de las medidas cautelares adoptadas.

Se adoptarán asimismo las medidas convenientes en orden al internamiento o tratamiento ambulatorio de las personas que, sometidas a investigación por hechos relacionados con el presente Convenio, presenten alteraciones mentales.

Asimismo se tomarán las prevenciones adecuadas en los casos en que existan hijos menores tributarios de recibir la actuación prevenida en materia de protección de menores (actual art. 158 del Código Civil), declarando en su caso la situación de desamparo y recabando la intervención de la Autoridad administrativa competente.

SEGUIMIENTO.-

Para procurar y atender al cumplimiento de los objetivos y finalidades marcadas en el presente Convenio, se constituye una Comisión de Seguimiento integrada por un representante a designar por cada una de las instituciones firmantes y/o posteriormente adheridas al mismo.

La Comisión de seguimiento se reunirá periódicamente o a solicitud de cualquiera de las instituciones firmantes del presente Convenio, debiendo ser convocada por el Presidente de la Comisión Provincial de Policía Judicial.

AMPLIACIÓN.-

La ampliación del presente Convenio a otros ámbitos de conflictividad específica pero relacionada, especialmente en los casos de agresión sexual y en los casos de menores víctimas, podrá verificarse mediante nueva firma del mismo por todas las instituciones inicialmente firmantes o ulteriormente adheridas.

EXTENSIÓN.-

La extensión del presente Convenio a otras entidades, instituciones, servicios o personas, podrá llevarse a cabo mediante simple suscripción del mismo en documento anexo extendido al efecto.

(SIGUEN LAS FIRMAS Y EL ANEXO)



CONVENI DE PAUTES D'ACTUACIÓ
CONTRA LA VIOLENCIA DOMÈSTICA HABITUAL

Signat a Palma de Mallorca, el dia set d'octubre de dos mil dos.

INSTITUCIONS SIGNANTS.-

Delegació del Govern a les Illes Balears
Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears
Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears
Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Balears
Institut de Reinserció Social
Comissió Provincial de Coordinació de la Policia Judicial de les Illes Balears

JUSTIFICACIÓ.-

El punt 7 del II Pla integral per a la violència domèstica habitual recull, entre les diverses mesures preventives i de sensibilització: «impulsar que les comunitats autònomes, amb la col·laboració de les delegacions de Govern, adoptin protocols de coordinació amb les diverses institucions del seu àmbit territorial».

Així mateix, el Govern de les Illes Balears va aprovar el document «Estratègies de prevenció i tractament de la violència domèstica», presentat per l'Institut Balear de la Dona, en què preveu un protocol d'actuació per coordinar les diverses institucions implicades.

El Consell General del Poder Judicial, mitjançant l'Acord de 21 de març de 2001, va abordar la problemàtica jurídica derivada de la violència domèstica mitjançant algunes suggerències legislatives i la fixació d'una guia pràctica d'actuació.

La Comissió Provincial de Coordinació de la Policia Judicial va acordar, en el seu moment, mésures destinades a facilitar la compareixença de testimonis (al marge de les mesures de protecció legalment previstes), sobre la constitució d'una subcomissió destinada exclusivament a tractar les qüestions relacionades amb la violència domèstica, i sobre la implantació d'un atestat únic per a aquestes infraccions, com a preludi d'aquest Conveni.

La problemàtica descrita com a «maltractaments» o «violència domèstica», habituals per raó de la convivència, constitueix un fenomen multifacètic i complex que respon a comportaments molt diversos, es projecta sobre situacions de signe molt variat, i es caracteritza en essència per la generació d'un clima de convivència o de postconvivència dirigit a obtenir una submissió personal intensa que, imposada amb agressivitat física o psíquica, vulnera greument la dignitat de les víctimes, atacant altres béns jurídics plenament protegits: la vida, la integritat física i psíquica, i la llibertat, fonamentalment.

Fruit de poderosos condicionants socials, culturals i econòmics, l'evolució del fenomen reflecteix una il·luminació progressiva de situacions antigament silenciades, o fins i tot tolerades i encobertes, que, amb l'impuls d'un nou moviment social que n'evidencia la repulsa, exigeix una resposta que, especialment pel que fa a la violència de gènere, demanda solucions dirigides a l'anàlisi, la prevenció, la detecció i el tractament del problema, només possibles des d'actuacions conjugades i integrals i que, per això mateix, s'han d'abordar necessàriament des d'una vertebració marcadament multidisciplinar.

OBJECTIU I FINALITAT..-

1. Assenyalar els comportaments necessaris per coordinar les diverses institucions i els diversos serveis, amb la finalitat d'optimitzar i de millorar els recursos existents.
2. Difondre les pautes d'actuació previstes en aquest Conveni.
3. Establir els mecanismes de seguiment aptes per mantenir, adaptar i reformar periòdicament les pautes d'intervenció adients per preservar la coordinació interinstitucional d'acord amb aquest Conveni.
4. Procurar ampliar aquest Conveni a d'altres àmbits de conflictivitat específica, però que hi sigui relacionada, especialment en els casos d'agressió sexual i en els casos de víctimes menors.
5. Estendre el marc institucional per aplicar aquest Conveni mitjançant l'acceptació d'adhesions institucionals ulteriors a la firma d'aquest.
6. Fomentar cursos, plans i activitats de formació i divulgació relacionades amb aquesta matèria.



ÀMBIT D'APLICACIÓ.-

La projecció d'aquest Conveni de coordinació contra la violència domèstica habitual pretén diversificar-se en diverses fases, perquè s'apliquin quan calgui una intervenció directa o indirecte per a la detecció, la intervenció o el tractament de situacions subsumibles en els preceptes penals que tipifiquen les conductes relacionades amb els maltractament o amb la violència domèstica habitual.

CONTINGUT.-

a) Detecció

La detecció de qualsevol situació que pugui tenir a veure amb fets susceptibles d'aplicar-hi aquest Conveni, dóna lloc a que es verifiqui una anàlisi prèvia a fi de prendre les mesures d'atenció i d'orientació més urgents.

Tota persona afectada pels fets integrats en l'àmbit d'aplicació d'aquest Conveni, fent especial atenció als casos que la possible víctima sigui immigrant, amb la dispensació prèvia dels serveis urgents mateixos, i sense perjudici de complir les obligacions legals de denúncia d'activitats possiblement constitutives d'infracció criminal, ha de ser informada de la forma més adient possible sobre la xarxa de serveis assistencials, i remesa als de caràcter policial, judicial, jurídic, social, psicològic, o qualsevol altre que en cada cas s'entengui més adient, per a la qual cosa ha de facilitar l'adreça, el telèfon i els horaris; si cal, se l'ha d'acompanyar personalment.

Tots els centres, tots els serveis, totes les dependències i tot el personal que depengui de les institucions que signen aquest Conveni i n'atenguin o en puguin atendre els serveis relacionats amb l'àmbit de la possible aplicació, han d'establir i de mantenir mecanismes estàtics o dinàmics dirigits a informar sobre les diverses prestacions i els diversos serveis aprofitables per les persones afectades.

L'Istitut Balear de la Dona ha de mantenir permanentment actualitzada tota la informació que disposi sobre els serveis i sobre les prestacions, per a la qual cosa les restants institucions que signen aquest Conveni li han de tramestre, o bé l'Istitut pot demanar, tots els detall que convinguin per a un manteniment actualitzat constant de la informació, que s'ha de compendiar en la guia de recursos que l'organisme esmentat editat, i distribuir entre els diversos centres dependents de les institucions signants. Aquest procés es pot fer per via electrònica a l'adreça següent: <http://ibdona.caib.es>.

Cada una de les institucions signants del Conveni es compromet a verificar i a mantenir actualitzada una difusió permanent d'aquest en l'àmbit intern, i a facilitar, a més, que les persones, els grups, els serveis o les entitats dependents l'apliquin i el compleixin, i a col·laborar, a aquest efecte, amb les que hi són relacionades.

b) Intervenció

1. Serveis sanitaris i metges forenses

Quan qualsevol servei sanitari o de medicina forense hagi detectat un cas susceptible de rebre l'aplicació d'aquest Conveni, a més de prestar l'assistència sanitària oportuna, l'ha de documentar degudament usant, en qualsevol cas, el model específic (annex), en què ha de fer constar les evidències, els vestigis i/o les lesions, procurant la major plasticitat possible en la descripció i utilitzant per a això els mitjans de major fidelitat que tingui a l'abast (gràfics, fotografia i videografia) i ha de emetre l'opinió experta sobre la possible etiologia i a bast de les malalties o lesions, per posar-les a disposició immediata de l'autoritat judicial, directament o a través dels agents.

El model específic (annex), elaborat per l'Istitut Balear de la Salut (IB-salut) s'ha de posar a disposició dels centres, dels serveis o de les dependències, incloent, entre aquests, les d'atenció urgent, les quals l'han d'usar.

S'ha de procurar que la documentació elaborada d'acord amb el model específic (annex) s'incorpori a la història clínica i —en qualsevol cas— es trameti a l'autoritat judicial directament pel camí, directe o indirecte, més ràpid.

2. Serveis d'assessorament i d'assistència jurídica, social i psicològica

Cal procurar la intervenció de professionals especialitzats per a l'anàlisi de la situació de la possible víctima, al marge de l'atenció mèdicosanitària.

La intervenció de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Balears, de l'Oficina d'Ajuda a la Victima, de l'Istitut Balear de la Dona, dels serveis dependents de l'IRES, i de qualsevol altres existents o implantables, s'ha d'estendre tant en relació amb les mesures d'assistència, com amb les de prevenció, que poden sol·licitar a les institucions i a les autoritats competents. Als efectes anteriors, poden mantenir reunions preparatòries o de feina en la seu de la Comissió Provincial de Policia Judicial.



Si hi ha més d'un centre o servei especialitzat en una població s'han de coordinar amb la finalitat de combinar horaris i medis, tant personals com materials, per tractar d'abastar l'espectre més ampli de cobertura.

S'han d'establir pautes de coordinació entre els diversos centres i serveis de la mateixa classe dins d'una població, que s'han de documentar i tramestre a la Comissió Provincial de Policia Judicial, a l'efecte d'aquest Conveni i de la difusió d'aquest de forma adequada, com també a fi d'aconseguir la homogeneïtat desitjada en les pautes de coordinació.

S'han de fixar canals per aconseguir una comunicació àgil entre els centres i serveis de classes diferents en una mateixa població; i s'ha de comunicar el mètode a la Comissió Provincial de Policia Judicial, la qual ha de procurar homogeneïtzar les pràctiques.

Si és necessari, s'han de procurar pautes de coordinació entre les poblacions diverses, siguin o no els serveis de la mateixa classe, i, si n'és el cas, mètodes de cobertura territorial a càrrec d'un centre o servei d'assessorament i assistència quan accepti prestar-los més enllà del seu àmbit genuí, amb la finalitat d'obtenir-ne l'extensió.

Aquestes pautes de coordinació han de preveure la manera d'observar una intercomunicació permanent de tots els serveis diversos que donin assistència a les persones involucrades en un mateix assumpte tributari d'aquest Protocol, amb la finalitat de prestar un assessorament i una assistència que compti amb garanties de tractament integral.

L'assistència social i psicològica s'ha de verificar mitjançant la recollida de dades pertinents, que s'han de documentar a l'efecte d'expedir els informes corresponents i ulteriors. S'hi inclouen els informes referents a l'estat psicològic de la possible víctima i, si n'és el cas, dels fills.

3. Serveis policials

El desenvolupament de les funcions relacionades amb els fets que preveu aquest Conveni s'ha de verificar de manera que les persones afectades rebin un tracte especialitzat i immediat, dispensat per funcionaris especialitzats, si n'hi ha.

S'ha de procurar que la presa de declaració a la víctima presumpta sigui verificada en l'entorn més adient possible, prenent, en qualsevol cas, les cautèles adients per evitar l'apropament o el contacte personal amb la persona o les persones presumptament agressores, els proppers d'aquestes o qualsevol que hi pugui estar relacionat. La declaració de la víctima presumpta s'ha de verificar, si és possible i hi consent, per mitjans de gravació audiovisual.

Els cossos i les forces de seguretat han de destinar funcionaris especialitzats a tractar les qüestions esmentades en l'àmbit d'aplicació d'aquest Protocol, els quals han d'intervenir directament i immediatament quan el cas ho requereixi, sense perjudici de la col·laboració procedent de qualsevol altres serveis policials no especialitzats en la matèria.

L'assistència a la víctima presumpta es considera urgent i, en cas que comparegui, se l'ha d'atendre d'immediat i s'ha de demanar l'assistència de naturalesa sanitària que sigui imprescindible o traslladar-la al centre sanitari, compatibilitzant-ho, en la mesura possible, amb la funció investigadora i d'assegurament de la prova. En cas que sigui possible se l'ha de traslladar a les dependències adients per iniciar les investigacions del cas.

Si la notícia sobre un fet susceptible de rebre l'aplicació d'aquest Conveni es rep de forma indirecta o referencial, és a dir, sense la compareixença personal de la persona afectada, s'ha de comprovar *in situ* i s'han d'esbrinar els fets denunciats, atenent amb preferència les feines d'assistència més urgents, recaptant les de naturalesa sanitària que sigui imprescindibles o traslladant la persona al centre sanitari, compatibilitzant-ho, en la mesura possible, amb la funció investigadora i d'assegurament de la prova.

En els supòsits de negativa a denunciar, s'han de practicar les diligències necessàries per esbrinar el fet i l'assegurament d'aquelles proves en què qualsevol dilació pugui comprometre'n l'eficàcia, i s'ha de posar tot a disposició de l'autoritat judicial.

La documentació de les diligències s'ha de verificar d'acord amb el model d'atestat únic aprovat per la Comissió Provincial de Policia Judicial, destinat a recollir les dades de manera homogeneïtzada en forma i contingut, per ordenar i tractar amb més utilitat la multiplicitat de circumstàncies de cara a l'anàlisi i la sistematització, i facilitar el tractament estadístic. Tot això sense perjudici de les modificacions que, si convé, s'hi puguin fer a causa de la verificació, per complementar o variar la recollida de dades en un supòsit concret.



En qualsevol cas, s'hagi verificat o no la utilització de l'atestat únic, les diligències policials d'esbrinament s'han d'encaminar a aconseguir que hi constin els punts següents:

Pel que fa a la persona denunciada:

La relació amb la víctima.

Els recursos econòmics.

Les addiccions (toxicomanies, alcoholisme, ludopatia, etc.).

La possessió d'armes (llicència, quantitat d'armes, etc.) o d'altres objectes perillosos.

Pel que fa a la víctima:

Els recursos econòmics, amb una atenció especials als comptes bancaris.

L'existència o no de procediment civil; si n'és el cas, s'ha de referenciar.

Si ha rebut assistència psicològica.

Si ha rebut assistència jurídica.

Pel que fa la convivència:

La composició del grup familiar que conviu en el mateix domicili, incloent-hi, si és rellevant, els recursos econòmics i la feina que fa cada un dels integrants.

Pel que fa als fets:

La determinació de possibles antecedents per fets similars o que hi estiguin relacionats.

En cas positiu, si aquests fets es van denunciar.

Si són o no vigents les mesures cautelars; en cas positiu, el número de procediment i de jutjat.

La descripció pormenoritzada dels fets, que reculli els antecedents per fets anterioris.

La referència a la possible figura penal i tipificació.

Pel que fa a les diligències practicades:

Les referències i els esbrinaments sobre l'estat mental de la persona investigada.

Els possibles testimonis directes i de referència sobre fets anteriors, simultanis o posteriors al fet investigat.

L'assistència mèdica rebuda i la naturalesa i l'abast de les possibles lesions, procurant una plasmació fidedigna i il·lustrativa mitjançant una fotografia o una videogravació, si hi ha aquests mitjans a l'abast.

La situació en què queda la víctima després de la denuncia.

La situació en què queden els menors que acompanyen o són a càrrec de la víctima.

L'ofertiment d'accions legals (articles 109 i 110 de la LEC).

Pel que fa a la informació:

La que fa referència al contingut de l'article 464 del Codi Penal (Instrucció de la Fiscalia General de l'Estat).

La possibilitat de sol·licitar a l'autorització judicial les mesures prèvies a la separació personal.

Les mesures d'assistència personal i de protecció com a testimoni que puguin convenir a la persona afectada.

La informació sobre els serveis d'assessorament i d'assistència social de qualsevol indole.

L'ofertiment d'assistència especialitzada mitjançant el Servei d'Orientació Jurídica que, en cada moment, doni el Col·legi d'Advocats.

El dret a la percepció dels serveis d'assistència a la víctima i les ajudes d'acord amb la Llei 25/1995, de 11 de desembre, sobre ajudes i assistència a les víctimes dels delictes violents i contra la llibertat sexual.

La possibilitat de sol·licitar mesures provisionals de separació davant del jutge competent.

S'ha d'informar la presumpta víctima de l'estat de les investigacions, en allò que no en comprometi l'avancament, i se li han de facilitar mitjans per contactar amb els investigadors.

4. L'Illustre Col·legi d'Advocats de Balears ha de mantenir el Servei d'Assistència Jurídica especialitzada a les víctimes de la violència domèstica, en compliment del que estableix el Conveni de col·laboració per a implantar serveis d'assistència jurídica especialitzada en les víctimes de la violència domèstica en els Col·legis d'Advocats, concertat pel Consell General de l'Advocacia Espanyola i el Ministeri de Justícia.



5. Les actuacions judicials en l'àmbit propi d'aquest Conveni s'han de desenvolupar oferint a les persones un tractament personalitzat i immediat, temperant el contingut de l'Acord de 21 de març de 2001, del Consell General del Poder Judicial, i qualssevol altres que ulteriorment puguin incidir sobre la matèria.

Es convida les junes de jutges a proposar, si de cas no n'hi ha, normes de repartiment que, aprovades per la Sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia, estiguin específicament dirigides a tractar de reunir en un sol procediments tots els assumptes, dels que preveu aquest Conveni, que estiguin en tramitació respecte d'unes mateixes persones. Si no hi hagués aquestes normes, o quan els diversos assumptes estiguin en curs davant òrgans judicial de diferent competència territorial, pot tractar d'obtenir-se el mateix efecte aplicant les disposicions reguladores de l'acumulació de causes per connexió (articles 17.3, 17.4 i 17.5 de la Llei d'enjudiciament criminal vigent) i de la competència (articles 18.1 i 18.2 de la Llei d'enjudiciament criminal vigent).

La informació prevista en aquest Conveni ha de posar-se a disposició dels deganats judicials, i especialment dels jutjats d'instrucció i de primera instància amb competència en assumptes de família (especialitzats o no), a l'efecte de poder-la utilitzar immediatament en els casos de detecció, que pugui ser-los d'utilitat en el cas d'atendre qualsevol persona afectada pels fets que tracta, a fi que puguin informar oportunament sobre els diversos centres i serveis en què es dispensen les prestacions que aquest Conveni tracta de coordinar, i especialment els d'assistència social, jurídica i psicològica que radiquin en el mateix edifici o en els entorns, com també els situats a la mateixa localitat o a les més properes, a fi que les previsions sobre orientació i assessorament previstes en l'apartat A d'aquest Conveni puguin dur-se a terme amb efectivitat.

Gràcies a les previsions d'aquest Conveni en matèria de detecció, s'ha de procurar que l'anàlisi de les situacions que s'hi preveuen sigui verificat pel personal expert, del qual s'ha de recaptar el dictamen oportú sobre valoració personal, familiar, social i, si n'és el cas, psicològica, sense perjudici d'iniciar els tràmits processals pertinents i tots el que requereixi urgència o inajornabilitat.

S'ha de comunicar a la Comissió Provincial de Policia Judicial els assumptes esmentats en aquest Conveni en què no s'hagi utilitzat el model d'atestat aprovat per aquesta, sense perjudici que interessa que es complementin les dades i es practiquin les informacions i diligències necessàries.

En qualsevol cas, s'ha d'atendre la possible aplicació de les disposicions legals més favorables per simplificar els tràmits, concentrar la instrucció en els primers moments, activar l'adopció de totes les mesures cautelars i de protecció que es considerin oportunes, accelerar la preparació del judici i enjudiciar sense dilació en els supòsits la senzillesa dels quals ho permeti, especialment en els casos flagrants, de detenció, de presència o de possible compareixença immediata de la persona investigada, de les parts restants i dels testimonis, sempre en la forma prevista per les disposicions processals en vigor.

La incorporació d'antecedents sobre els fets de què tracta aquest Conveni, serà sol·licitada al Ministeri Fiscal.

S'ha de procurar que la presa de declaració a la víctima presunta sigui verificada en l'entorn més reservat possible, prenen en qualsevol cas les cauteles adequades per evitar l'apropament o el contacte personal amb la persona o les persones presumptament agressores, els seus proponents o les que hi poguessin estar relacionades. La prestació de declaració de la presunta víctima s'ha de verificar, tan aviat com sigui possible, per mitjans de gravació audiovisual.

En els casos de renúncia a la denúncia o en els de negativa a prestar declaració incriminatòria, s'ha d'informar la presunta víctima sobre l'obligació de denunciar i de prestar declaració, a preserva que es vegi compromesa la seva activitat psíquica d'acord amb la determinació experta, i s'ha de procurar assegurar el resultat de la investigació per qualssevol altres mètodes provatoris; així mateix, s'han d'indagar les causes determinants de retractacions o d'incompareixences, i suspendre els tràmits ajornables fins a haver obtingut la constància deguda de la situació.

El compliment de l'obligació sobre l'ofertiment d'accions (en l'actualitat, els articles 109 i 110 de la Llei d'enjudiciament criminal) s'ha de verificar en els casos prevists en aquest Conveni i, a la vegada, s'ha d'informar sobre les diverses prestacions que puguin convenir en cada cas, procurant obtenir l'auxili expert dels centres o serveis d'atenció especialitzats tan aviat com sigui possible, si encara no hi han intervingut.

Així mateix, s'ha d'informar la persona afectada de l'existeància del Servei d'Orientació Jurídica facilitat per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats, a fi que pugui tenir l'assessorament més adient en tots els vessants que li convinguin, especialment de cara a l'exercici eventual d'accions civils en matèria de separació personal que puguin requerir caràcter d'urgència, i s'han d'encaminar els tràmits previnguts per obtenir el dret a l'assistència jurídica gratuïta, quan pertoqui.

En el cas que la persona afectada hagi decidit abandonar el domicili on té lloc la convivència conflictiva, s'ha de fer constar adequadament la circumstància per enervar les accions eventuals pel possible delicte d'abandonament de família; i quan es mudi de domicili o es traslladi a un centre d'acollida, s'ha d'assegurar la reserva de qualsevol dada que pugui revelar on és, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 19/1994, de 23 de desembre, de protecció de testimonis en causes criminals.

Quan en alguna causa es detectin aspectes relacionats amb l'aplicació d'aquest Conveni, no s'ha de descartar l'aplicació possible de mecanismes dirigits a la solució alternativa del conflicte, prestant les



maneres de mediació institucionalitzada existents o implantables, i així mateix, procurant que s'involucrin, quan sigui factible, ambdues parts en l'execució de les mesures tant cautelars com definitives, especialment en els supòsits de conformitat, en relació als possibles mecanismes rehabilitadors i de tractament.

En determinar les mesures cautelars penals que pertoquin (presó provisional, allunyament o prohibició d'apropament, mesures de tractament, compareixences periòdiques de la persona imputada, protecció policial, connexió al circuit d'identificació telefònica, etc.), com també quan s'estableixen les mesures provisionals o definitives sobre la separació personal, s'ha d'indagar sobre la situació convivencial en què s'hagin de projectar, i especialment les possibles repercussions que pot tenir per compliment, trencament, modificació o cessament de mesures procedents ja aplicables, tant en l'ordre criminal com en el civil, especialment pel que fa a la residència de les persones afectades i a les possibles relacions de futur amb la persona presumptament agressora, i singulament a tenor d'una colisió eventual entre les mesures civils i penals (ordre d'allunyament o prohibició d'aproximació, règim de visites establert per raó de fills comuns), que han de modalitzar-se a l'efecte d'evitar confrontacions inconvenients, procurant usar els serveis més idonis en cada cas, especialment els punts de trobada (si n'existeixen, i en la mesura de les possibilitats), o adoptant, a manca d'això, mesures d'acompanyament o d'assistència.

En conseqüència, es convida les junes de jutges a adoptar, en cas que no en tinguin, pràctiques específicament dirigits a definir detalladament les competències assignables a cada òrgan en funció dels diversos ordres jurisdiccionals, amb la finalitat d'obtenir una dispensació de tutela eficaç i coherent.

Així mateix, s'ha de donar a conèixer immediatament l'obertura de nous procediments judicials relacionats amb les mateixes persones, la presa de decisions noves, i el trencament o l'incompliment de les ja adoptades, quan aquestes eventualitats puguin influir en la situació, tractant de coordinar-les per facilitar una resposta integral i coherent, i evitant, a més, les disfuncions, les interferències i els condicionants que el compliment o la desatenció d'unes mesures pugui suposar respecte de les altres. Per aquest motiu, és recomanable una intercomunicació immediata entre els òrgans jurisdiccionals, que no és exclusivament recaptable en l'àmbit d'una mateixa junta de jutges, sinó també entre els diversos òrgans judicials del territori, ja que poden derivar-se interferències tant dins d'un mateix ordre jurisdiccional, com entre distints ordres jurisdiccionals (civil o criminal), tant durant la fase instructora com en la decisòria o en la d'execució (criminal), com en peces sobre mesures, en les interlocutòries principals o en procés d'execució (civil), apart d'en una mateixa o en diferents instàncies (primera o segona), la qual cosa involucra tant als jutjats d'instrucció i de primera instància competents en assumptes de família (especialitzats o no), com als jutjats penal i a l'Audiència Provincial. En conseqüència, la comunicació d'antecedents i el transvassament de dades, de diligències i de proves, en ordre a conjugar les diferents decisions, si no és recaptada per les parts, ha de ser tramesa directament, quan pertoqui, per la via més ràpida, respecte de qualsevol òrgan judicial del territori, independentment de l'ordre jurisdiccional i de la competència territorial o funcional; cada un dels òrgans judicials involucrats ha de decidir en l'àmbit de la seva competència, un cop informat adequadament de la situació.

S'ha d'informar la víctima presumpta de qualsevol alteració, variació, i especialment del cessament de les mesures cautelars adoptades.

S'han d'adoptar, així mateix, les mesures convenientes per internar o tractar ambulatòriament les persones que, sotmeses a la investigació per fets relacionats amb aquest Conveni, presentin alteracions mentals.

Així mateix, s'han de prendre les prevencions adients en els casos que hi hagi fills menors tributaris de rebre l'actuació recollida en matèria de protecció de menors (actual article 158 del Codi Civil), i s'ha de declarar, si n'és el cas, la situació de desemparament i recaptar la intervenció de l'autoritat administrativa competent.

SEGUIMENT.-

Per procurar i atendre el compliment del objectius i de les finalitats marcades en aquest Conveni, es constitueix una Comissió de Seguiment integrada per un representant que ha de designar cada una de les institucions signants i de les posteriorment adherides a aquest Conveni.

La Comissió de Seguiment s'ha de reunir periòdicament, o a sol·licitud de qualsevol de les institucions signants d'aquest Conveni, i ha de ser convocada pel president de la Comissió Provincial de Policia Judicial.

AMPLIACIÓ.-

L'ampliació d'aquest Conveni a altre àmbits de conflictivitat específica, però relacionada, especialment en els casos d'agressió sexual i en els casos de víctimes menors, pot verificar-se mitjançant una nova signatura del mateix per totes les institucions inicialment signants o posteriorment adherides.

EXTENSIÓ.-

L'extensió d'aquest Conveni a d'altres entitats, institucions, serveis o persones, pot fer-se mitjançant una simple subscripció del mateix en un document annex estès a aquest efecte.

(SEGUEIXEN LES FIRMES Y EL ANNEX)



A N E X O / ANNEX

PART JUDICIAL D'ASSISTÈNCIA MÈDICA

Nombre de registre (*numerau els fulls*):

_____, col·legiat /col·legiada nom i matrícula
_____, metge de _____
nom i adreça del centre assistencial

telèfon _____,

COMUNIC:

Que a les _____ del dia _____, a _____
hora

he atès a _____, de _____ anys.

Espai per a l'etiqueta identificativa, si se'n té. Si no,

telèfon

A l'exploració física s'observen les LESIONS següents:

que segons la persona lesionada s'han produït dia _____, causades per

objecte o circumstància

i que per les característiques que presenten són compatibles amb lesions per (*si no hi ha criteris definits o sospitals sobre la causa, ho podeu deixar en blanc*):

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> accident de trànsit | <input type="checkbox"/> atropellament |
| <input type="checkbox"/> agressió física | <input type="checkbox"/> agressió sexual |
| <input type="checkbox"/> maltractament infantil | <input type="checkbox"/> maltractament d'àmbit familiar |
| <input type="checkbox"/> arma blanca | <input type="checkbox"/> arma de foc |
| <input type="checkbox"/> altres | |

S'han efectuat proves complementàries? (*en cas afirmatiu, quins tipus de proves i els resultats*)

no

sí _____

D'acord amb el meu criteri, les lesions descrites

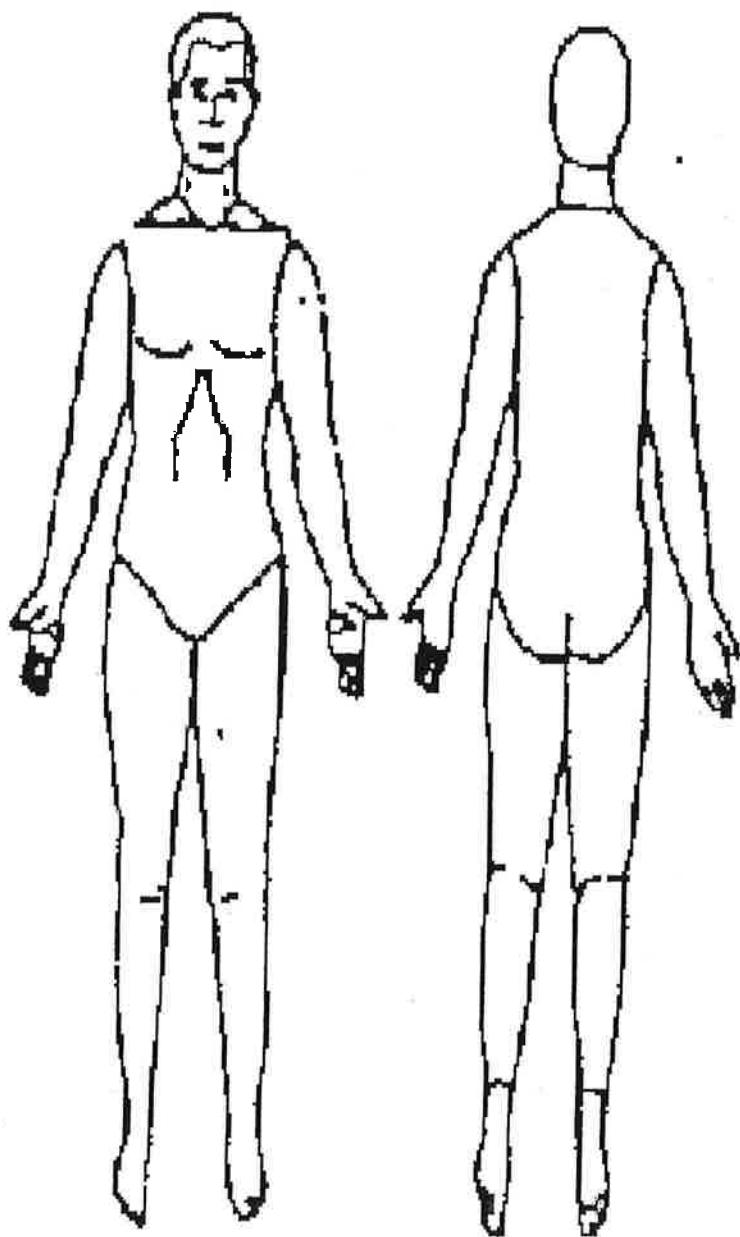
- necessiten assistència mèdica posterior.
 no necessiten assistència mèdica posterior.

Signatura

SR. JUTGE DEL JUTJAT DE GUÀRDIA DE _____



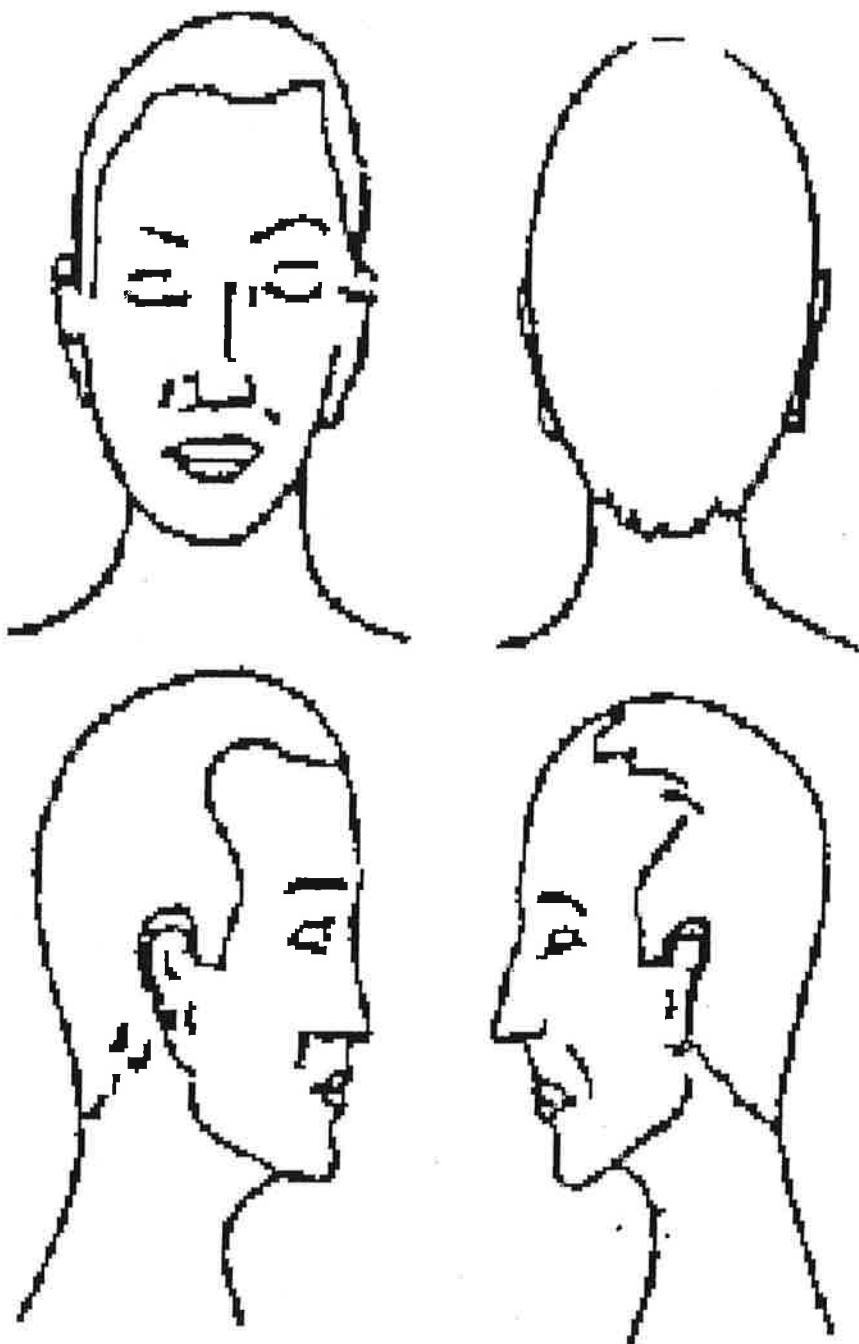
ANEXO / ANNEX



OBSERVACIONES:



ANEXO / ANNEX



OBSERVACIONES:



La Excma.Sra.Delegada del Gobierno.
Dª. Catalina Cirer Adrover.

El Hn.Sr.Conseller de Presidencia.
D. Antoni Garcias Coll.

La Hn.Sra.Consellera de Salut i Consum.
Dª. Aina Salom Moll.

La Hn.Sra.Consellera de Benestar Social.
Dª. Fernanda Caro Blanco.

El Exmo.Sr.Decano del Colegio de Abogados.
D. Joan Font Servera.

La Sra.Directora del IRES.
Dª. Montserrat Toha.

El Ilmo.Sr.Presidente de la Audiencia Provincial.
D. Antonio José Terrasa García